

ra emitir en los mercados y tener el dinero. Y los Parlamentos nacionales tienen que aprobar los recursos. Sánchez también pelea con el fin de que se rebajen las elevadas condiciones que ha impuesto la Comisión para poder acceder a los fondos. En estas se ha incluido más burocracia, las recomendaciones de reformas no completadas de años anteriores como la de las pensiones, la situación fiscal y los desequilibrios excesivos. En el entorno del Gobierno se considera que las nuevas guías que ha presentado la Comisión son excesivas e intrusivas.

Más efectivos

En cualquier caso, los 20.000 millones se pintarán en los Presupuestos como un gasto con independencia de cuándo se puedan ingresar. Ese monto haría que se duplicase la cifra que destinan las Administraciones a inversión en un año, ahora en 25.000 millones.

Respecto a la gestión, el presupuesto es la única forma eficiente de poner en marcha unas cantidades tan importantes, defiende el Gobierno. Y conscientes de los cuernos de botella que se pueden crear, Moncloa planea aumentar el personal dedicado al trámite de fondos europeos. "En el papeleo es donde pueden naufragar muchos proyectos. Ahí es donde nos esperan los frugales", señalan.

"El circuito presupuestario no está preparado para ejecutar esto administrativamente", dice Moisés Martín, de Red2Red, experto en la tramitación de fondos europeos. Por esta razón se pretende al menos duplicar la oficina de gestión de los fondos europeos situada en Hacienda. E incluso una parte podría radicarse en Bruselas bajo el control de Moncloa, lo que causa recelos en Economía.

Y no habrá un tramo autónomico de los fondos. En general Economía coordina, y la oficina del presidente decide, tiene el control político de los mensajes y de las relaciones con el Ixex. Y este margen que brindan las inversiones se usará para la negociación de los presupuestos, admiten algunas fuentes gubernamentales.

Proyectos no faltan. Se habla de que los ministerios ya han puesto sobre la mesa propuestas por valor de 200.000 millones para los 140.000 millones en total de fondos entre préstamos y ayudas. Y están acelerando porque van con retraso sobre otros países como Francia o Italia.

zonas rurales. Europa pide reformas, pues hagámoslas. Hay que canalizar capital e inversión a las zonas rurales. Hay que cambiar la ley universitaria para que esa innovación se genere en España y se exporte al mundo. Hay que cambiar la ley de protección de datos para usar la inteligencia artificial y ser más eficientes. Hay que cambiar la ley de contratos públicos, que es de las más burocrática desde Napoleón. Hay que aprobar un reglamento de autoconsumo para que nuestros productores e industrias puedan aprovecharse de la tecnología fotovoltaica sin tener que pagar los costes de los errores de política energética de los últimos 40 años. Hay que adaptar la regulación laboral para facilitar los nuevos empleos. Veremos.



Vista general del Parlamento Europeo, en Bruselas. / OLIVIER HOSLET (EFE)

La izquierda europea presiona para relajar las condiciones del fondo de reconstrucción

LLUÍS PELLICER, Bruselas
Los grupos de la izquierda del Parlamento Europeo buscan rebajar la condicionalidad impuesta por la Comisión Europea para que los países accedan al fondo de recuperación. Socialdemócratas, verdes e izquierda europea tratan de desvincular

los desembolsos del cumplimiento de las reglas fiscales y de ciertas reformas como la de las pensiones. En el caso de España, en juego hay casi 60.000 millones de euros en subvenciones. La Eurocámara sí pedirá que se aumenten los anticipos que se den a los países.

Bruselas ha hallado en el plan de recuperación una vía para lograr arrancar de las capitales algunas de las reformas que persigue. Las pautas publicadas por la Comisión Europea fijan tres grandes ámbitos prioritarios: las medidas contra el blanqueo de capitales, que apuntan a Chipre o Malta; las reformas vinculadas a la mejora del entorno empresarial (España e Italia), y las relacionadas con una fiscalidad lesiva para el resto de socios (Países Bajos e Irlanda).

La negociación de ese paquete masivo de ayudas, que asciende a 750.000 millones —de los cuales 672.500 millones se articularán a través del llamado fondo

de recuperación y resiliencia— ha entrado en fase parlamentaria. Los calendarios son ajustados: a finales de octubre el fondo debería votarse en comisión para ser ratificado en pleno en noviembre. Y a partir de ahí, arrancar la negociación a tres bandas, entre Parlamento, Consejo y Comisión. Si todos los plazos se van cumpliendo y los parlamentos nacionales ratifican el pacto, el fondo podría echar a andar en febrero de 2021.

La Eurocámara por ahora ya ha elaborado un borrador de informe que señala cambios respecto a la propuesta de la Comisión. La socialista Eider Gardiazábal,

ponente del informe sobre el fondo de resiliencia y recuperación, explica que el borrador incluye un aumento de los anticipos que recibirán los países. En principio, estos tendrán a comienzos de año un 10% de las cantidades asignadas. Sin embargo, la Eurocámara pide duplicar esa proporción, hasta el 20%.

El informe, además, permite incluir en los planes inversiones y reformas con carácter retroactivo, es decir, efectuadas desde el comienzo de la pandemia. De este modo, los países podrían recibir oxígeno, puesto que todos los trámites previos a la emisión de deuda y los desembolsos podrían

demorar los pagos. El borrador también recoge que el dinero que los países no gasten vaya al Presupuesto de la UE.

Los grupos parlamentarios han introducido, de forma paralela, 1.715 enmiendas. La izquierda se ha fijado como prioridad rebajar las condiciones impuestas por la Comisión. Fuentes diplomáticas creen que estas van más allá de lo decidido en el Consejo al introducir un artículo que da la potestad a la Comisión de suspender el desembolso de fondos si no se respetan las reglas fiscales.

Países perjudicados

Ahora esa cláusula no se aplicaría, puesto que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento está suspendido *de facto*, pero podría perjudicar a los países más rezagados en la recuperación en caso de que se decidiera reactivar a partir de 2022. "Los socialistas estamos en contra de esa cláusula, que sería contraproducente para el objetivo del plan, que es el de reactivar las economías europeas", sostiene Gardiazábal.

El diputado de Los Verdes Ernest Urtsus recuerda que esa disposición ya se introdujo en su día para los fondos de cohesión. "La posición del Parlamento Europeo en su día fue que no queríamos ligar la política de cohesión con la condicionalidad macro. Y queremos que esa vuelva a ser la posición de la Cámara", afirma. El gobierno del PP ya vio cómo se iniciaba un procedimiento contra España por ese motivo.

La diputada Sira Rego, de la Izquierda Unitaria, afirma estar en la "misma línea". "Hemos sido muy nítidos. Uno de nuestros ejes ha sido la condicionalidad basada en los recortes y seremos beligerantes contra las decisiones que puedan dejar los estados sociales mermeados", advierte.

Los tres grupos también pedirán que no se vinculen los fondos con reformas que no estén dentro de los objetivos prioritarios del reglamento. Eso dejaría fuera la de las pensiones, a la que podría verse abocada España con el articulado de la Comisión. Los tres partidos suman 276 escaños, es decir, 77 menos de la mayoría absoluta. Los partidos creen tener opciones de que se apruebe retirar el vínculo con las reglas fiscales, pero no tanto con las reformas. No es la última batalla: en noviembre deberán vérselas con la Comisión y el Consejo.

El Reino Unido anuncia nuevos planes para evitar despidos

El ministro de Economía británico presenta un segundo presupuesto de emergencia

RAFA DE MIGUEL, Londres
El ministro británico de Economía, Rishi Sunak, presentó ayer en el Parlamento sus planes para evitar una oleada de despidos masivos cuando finalice octubre. Esa es la fecha en la que caduca el *Jobs Retention Scheme* (Plan de Retención de Empleo), un esque-

ma similar al de los ERTE españoles pero inédito en la cultura laboral del Reino Unido, por el que el Gobierno ha llegado a pagar hasta el 80% del salario de los trabajadores obligados a permanecer recluidos en sus casas. Más de tres millones de trabajadores siguen recibiendo esas ayudas. Conscien-

te de que las medidas, que han supuesto más de 40.000 millones de euros, no garantizaban la viabilidad de "puestos de trabajo zombis" destinados a desaparecer cuando el programa terminara, Sunak ha impulsado un nuevo paquete de medidas menos generoso y más selectivo, bautizado como *Job Support Scheme* (Plan de Apoyo al Empleo). "A medida que la economía vuelve a abrirse, sería un error mantener una serie de puestos de trabajo que solo sobreviven gracias a las ayudas. No puedo salvar cada negocio o cada empleo. Ningún ministro podría hacerlo", admitió Sunak en la Cámara de los Comunes.

Bajo el nuevo esquema, que comenzará a aplicarse a partir de noviembre, las empresas podrán incorporar mayor flexibilidad al

horario de sus empleados. El Gobierno asumirá hasta un 22% del salario total, siempre que los trabajadores cumplan al menos un tercio de lo que era su horario habitual. El empresario asumirá el pago de las horas trabajadas y un tercio de las no trabajadas. En definitiva, el empleado podría acabar recibiendo un 77% de su sueldo completo. Junto al nuevo plan, Sunak avanzó la ampliación de los préstamos garantizados por el Estado, así como el aplazamiento del pago de algunos impuestos. Teatros, cines, hoteles, restaurantes y pubs seguirán pagando hasta marzo un IVA reducido del 5%. Los créditos fallidos renegotiados por seis años podrán extenderse hasta diez años, y solo se pagarán intereses en los próximos seis meses.